

# RV: R17051 RV: DEMANDA ADMINISTRATIVA DE GONZALO ANTONIO CASTAÑO VS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI RESOLUCIONES 9102 de 2019 y 0627 de 2021

Carlos Andres Gonzalez Restrepo <cgonzalezr@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 20/10/2021 12:17 PM

Para: Juzgado 09 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm09cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Recepcion Procesos Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Valle Del Cauca - Cali <repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; abogado detransporte@gmail.com <abogadodetransporte@gmail.com>

Cordial saludo, por solicitud del remitente se envía el proceso adjunto con número de radicación 76001333300920210021900.

<b>Rama Judicial del Poder Publico</b> <b>Consejo Superior de la Judicatura</b> <b>Sala Administrativa</b>				
<b>ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO</b>				
Fecha:	20/oct./2021	Página		1
NUMERO DE RADICACIÓN		76001333300920210021900		
CORPORACION	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE CALI	GRUPC	NULIDAD Y REST. DERECHO	OTROS ASUNTOS
REPARTIDO AL DESPACHO		CD. DESP	SECUENCIA:	FECHA DE REPARTO
		009	50989	20/10/2021 12:16:20p. m.
<b>09-JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI</b>				
IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDO	PARTE	
9695226	GONZALO ANTONIO CASTAÑO	OSPINA	01	
16774413	EDWARD LONDOÑO ROJAS		03	
R.17051-LLEGA X EMAIL EL 20/10/2021-H.11:42 PM ADJ.3		CUADERNOS	FOLIOS	
ARCHIVOS				
C27001-OFAPXAD				
cgonzalezr		EMPLEADO		

## CARLOS ANDRES GONZALEZ RESTREPO

Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos Cali

Reparto

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**De:** Recepcion Procesos Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Valle Del Cauca - Cali

<repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 20 de octubre de 2021 11:43

**Para:** Carlos Andres Gonzalez Restrepo <cgonzalezr@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto:** R17051 RV: DEMANDA ADMINISTRATIVA DE GONZALO ANTONIO CASTAÑO VS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI RESOLUCIONES 9102 de 2019 y 0627 de 2021

Atentamente,

**DAVID FERNANDO SANDOVAL MORALES**

Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos Cali

Reparto

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

---

**De:** Edward Londoño Rojas <[abogadodetransporte@gmail.com](mailto:abogadodetransporte@gmail.com)>

**Enviado:** miércoles, 20 de octubre de 2021 11:42

**Para:** Recepcion Procesos Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Valle Del Cauca - Cali

<[repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co)>

**Asunto:** DEMANDA ADMINISTRATIVA DE GONZALO ANTONIO CASTAÑO VS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
RESOLUCIONES 9102 de 2019 y 0627 de 2021

Buen día,

Allego demanda administrativa para su respectivo reparto con copia a la alcaldía de Cali.

**Solicito respetuosamente confirmación de recibido.**

**Cordialmente;**

**EDWARD LONDOÑO ROJAS**

Abogado

Tel: 397 5352

Celular: [318 716 5235](tel:3187165235)

Calle 10 No. 4 - 40 Of. 505 Ed. Bolsa de Occidente

Cali - Colombia

E-mail: [abogadodetransporte@gmail.com](mailto:abogadodetransporte@gmail.com)

**La información de este mensaje y sus anexos son propiedad del abogado Edward Londoño Rojas, es de uso exclusivo del destinatario intencional y puede contener información de carácter privado o confidencial derivado al secreto profesional. Cualquier revisión, retransmisión, divulgación, copia o uso indebido de este documento y sus anexos a no ser el destinatario estará totalmente prohibida y acarreará las sanciones penales correspondientes.**

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Rama Judicial del Poder Público  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Santiago de Cali – Valle

Tipo de Juzgado:	<u>ADMINISTRATIVO</u> Código	<u>REPARTO</u> Denominación
Especialidad	<u>CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA</u> Código	denominación
Grupo / Clase de Proceso: <u>MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO</u>		

No. Cuadernos: (1) Folios Correspondientes: (0000)

DEMANDANTE (S)

Nombre (s)	1. Apellido	2. Apellido	No. C. C. - NIT
GONZALO	ANTONIO	CASTAÑO OSPINA	9.695.226

Dirección Notificación: Calle 30 N° 2A – 29 Piso 2 Oficina 302 y al Correo Electrónico:  
valleint@gmail.com

DEMANDADO

Nombre (s)	1. Apellido	2. Apellido	No. C. C. – NIT
	SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI		

Dirección Notificación: Carrera 3 No 56 -90, Barrio Salomía y al Correo Electrónico:  
movilidad@cali.gov.co

DEMANDADO

Nombre (s)	1. Apellido	2. Apellido	No. C. C. – NIT
	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		

Dirección Notificación: Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 – 70 y al  
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

APODERADO

Nombre (s)	1. Apellido	2. Apellido	No C. C. –NIT
EDWARD	LONDOÑO	ROJAS	16.774.413

Dirección Notificación: Calle 10 No. 4 - 40 Ofi. 505 Edificio Bolsa de Occidente y al Correo  
Electrónico abogadodetransporte@gmail.com.

Confirmo que los anteriores datos corresponden a los asignados en la demanda

Radicado Proceso

Ingreso

Sentencia de fecha

Firma apoderado

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

Señor.  
**JUEZ ADMINISTRATIVO.**  
Santiago de Cali - Valle

**ASUNTO: MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE LAS RESOLUCIONES 4152.010.21.0.9201 DEL QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 4152.010.21.0.0627 DEL DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021.**

**DEMANDANTE: GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA PROPIETARIO DEL VEHÍCULO DE PLACAS VBV075.**

**DEMANDADOS: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CALI.**

Respetuoso saludo,

Se dirige a su despacho **EDWARD LONDOÑO ROJAS**, persona mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N.º 16.774.413 expedida en Santiago de Cali - Valle del Cauca, abogado titulado y en ejercicio, y con Tarjeta Profesional N.º 116.356 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido por el señor **GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA**, igual persona mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N.º 9.695.226 propietario del vehículo de placas VBV075 afiliado a la empresa **TRANSPORTES MONTEBELLO S. A.**, identificada con Nit. 800.004.283-8, con todo respeto allego ante su Honorable Despacho el presente libelo demandatorio - **MEDIO DE CONTROL - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en contra del **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CALI**, con domicilio en la Carrera 3 No. 56 - 90, Barrio Salomía, en la ciudad de Santiago de Cali - Valle, Representada Legalmente por **WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO**, o por quien lo reemplace ó haga sus veces, con sustentación en los Artículos. 137, 165 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con los siguientes:



# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

### HECHOS:

**PRIMERO.-** El día veinticuatro (24) de marzo del 2017, el agente de tránsito identificado con la placa No. 209, elaboró informe único de infracciones de tránsito queriendo hacerlo valer como si fuera de “informe a las infracciones de transporte” (reglamentado por el art. 54 del Decreto 3366 de 2003) No. 76001 - 0026960, al vehículo de placas VBV075.

**SEGUNDO.-** El Municipio de Santiago de Cali y el Secretario de Tránsito y Transporte, inició investigación administrativa a través de la Resolución No. 4152.0.21.2537 del seis (06) de junio de 2018, *por incurrir en una presunta infracción a las normas del Transporte, de acuerdo a la Resolución 10.800 de 2003, Código de Infracción 590”.*

**TERCERO.-** El suscrito actuando como apoderado judicial del señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, presenté descargos a esta investigación, dentro de los términos legales.

**TERCERO.-** El Municipio de Cali, Secretario de Tránsito y Transporte a través de la Resolución No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019, se resolvió una investigación administrativa, en la cual se determinó sancionar al señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, por permitir la prestación de servicio público no autorizado en el vehículo de placas VBV075 con multa de TRES (03) S.M.L.M.V para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017 equivalente a DOSMILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS MCTE (\$2.213.151).

**QUINTO.-** El Municipio de Cali, Secretaria de Tránsito y Transporte resolvió el Recurso de Reposición con la 4152.010.21.0.0627 DEL DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021, confirmando la resolución No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019. y no permitiendo a esta decisión de fondo tener doble instancia como lo contempla el artículo 31 de la Constitución Nacional y los artículos 134 y 142 de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, teniendo en cuenta el artículo 162 de la Ley 769 de 2002, por análoga de las normas de Transporte, pues el procedimiento que se aplicó unilateralmente por la secretaria de Movilidad dejó sin doble instancia a este procedimiento,

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

haciendo las veces de legislador.

**SEXTO.-** El señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, me ha otorgado poder amplio y suficiente para impetrar libelo demandatorio - **MEDIO DE CONTROL - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en contra del **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CALI.**

### **OMISIONES**

**PRIMERO.-** No se dio oportunidad para presentar alegatos de conclusión a la investigación administrativa, tal como lo ordena la **Ley 1437 del año 2011 en concordancia con el artículo 51 de la Ley 336 de 1996** y no permitiendo a esta decisión de fondo tener doble instancia como lo contempla el artículo 31 de la Constitución Nacional y los artículos 134 y 142 de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, en concordancia con el artículo 162 de la Ley 769 de 2002, que por análoga de las normas de Transporte, pues el procedimiento que se aplicó unilateralmente por la Secretaria de Movilidad dejó sin doble instancia a este proceso, haciendo las veces de legislador, competencia que no es de su resorte y muy por el contrario, se procedió a sancionar de manera directa a mi representada, amén de que se debe tener en cuenta que cualquier norma infra legal como es nuestro caso concreto (decretos reglamentarios o ejecutivos, resoluciones, circulares, directiva, instructivos, ordenanzas, acuerdos y, en general, cualquier acto administrativo) que contenga un procedimiento administrativo sancionatorio, quedó derogada por expresa disposición de los **ARTÍCULOS 3º-1, 47 Y 309 DEL LEY 1437 DE 2011, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 29 CARTA POLÍTICA A PARTIR DEL 2 DE JULIO DE 2012**, fecha en la que entró a regir el **C. P. A. C. A.**, aunado a lo anterior no puede operar el Decreto Municipal No. 4112.01020.0566 de agosto 25 de 2017, donde delega las funciones al Señor Secretario de Movilidad de proceder solo con el recurso de reposición, toda vez que este mismo fue derogado de acuerdo a lo enunciado anteriormente expuesto en concordancia con el Artículo 31 Constitucional, violando el Derecho Fundamental de la doble instancia. **EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 134 Y 142 DE LA LEY 769 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 1383 DE 2010, DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES MUY POSTERIORES**

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

A LA LEY 336 DE 1996 QUE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ARGUMENTA PARA CERCENAR EL DERECHO DE LA DOBLE INSTANCIA.

**SEGUNDO.-** El informe presentado por el agente de tránsito del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, no puede ser tenido en cuenta, toda vez que quien lo elaboró no es el funcionario competente para hacerlo esto de acuerdo al artículo 54 del Decreto 3366 de 2003 el cual ordeno tipificar las conductas irregulares de transporte en el formato de que trata la resolución 10.800 de 2003.

**TERCERO.-** Hubo atipicidad en la conducta endilgada y una falsa motivación al momento de emitir la sanción.

**TERCERO.-** No se agotaron las etapas del Régimen Administrativo Sancionatorio, tal como lo indica el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y que entra a regir el día 02 de julio de 2012.

**QUINTO.-** Extemporaneidad al momento de enviar el informe a las infracciones al transporte por parte de la Secretaría de Tránsito, de acuerdo al **Artículo 135 de la Ley 769 de 2002, y que entre otras cosas es obligatorio por mandato legal; y que a la letra se lee:** Modificado por la Ley 1383 de 2010, artículo 22. **Procedimiento.** Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. **Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.**

**Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.**

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

**SEXTO.-** No existe prueba técnica ó evidencia física como tampoco elementos materiales de prueba, que soporte las afirmaciones del Agente de Tránsito de placas 341, toda vez que si bien es cierto el Informe Único de Infracciones de Transporte es el documento idóneo para iniciar investigación administrativa en virtud a las características de idoneidad y veracidad que ostenta debido a su naturaleza de documento público, no es menos cierto que para entrar a formular cargos y generar una sanción, los fundamentos deben encontrarse soportados en un dictamen técnico adecuado que corrobore lo percibido por el funcionario y así determinar la responsabilidad de la empresa afiliadora del automotor presunto infractor, pues este tipo de conductas, logran una complejidad que supera las simples consideraciones emitidas a causa de la percepción. Por otro lado, las observaciones que describió el agente de tránsito en el IUIT, no se encuentra más información que conlleve a la certeza de las afirmaciones del agente de tránsito, no se encuentra suficiente convencimiento de la presunta conducta reprochable atendiendo única y exclusivamente a las descripciones hechas por el agente de tránsito en el Informe **No. 76001 - 0026856 del veinticuatro (24) de marzo del 2017,** por lo tanto, no se encuentra certeza de la conducta presuntamente reprochable delimitada en las normas que regulan el sector transporte.

En este orden de ideas y, conforme al principio de eficacia, NO ES procedente considerar - SANCIONAR - dentro de la investigación administrativa, ni pronunciarse sobre las pruebas que supuestamente se tienen, toda vez que no se tiene suficiente material probatorio que conlleven al convencimiento de que se infringió la norma, por lo tanto, solicitamos muy respetuosamente declarar nulidad a las resoluciones sancionatorias, **pues repito solo se contó como prueba para sancionar el informe único de tránsito, mas no de transporte como lo ordena el artículo 54 del Decreto 3366 de 2003, único que sanciona estas presuntas infracciones al transporte, es decir la Secretaria de Tránsito de Santiago de Cali, ni siquiera elabora presunta infracción en el formato ordenado por el Ministerio de Transporte a través del Decreto 3366 de 2003<sup>1</sup> y su Resolución que codifica las mismas, 10.800 de 2003, ahora bien en el peor de los escenarios el INFORME ÚNICO A LAS INFRACCIONES DE TRANSPORTE NO ES PRUEBA COMO TAL, NO SE CONSOLIDA LA MISMA, ESTO DE**

---

<sup>1</sup> Decreto 3366 de 2003, por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas del transporte público terrestre automotor y se determinan unos procedimientos.

---

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

ACUERDO A LOS REITERADOS PRONUNCIAMIENTOS DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO.

### PRETENSIONES

**PRIMERO-** Declarar la **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** de la **Resolución No. 4152.010.21.0.0627 DEL DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021** y **No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019**, proferida por el Municipio De Cali, Secretario de Tránsito y Transporte por, en cuanto la expresión allí contenida en el Resuelve de la **Resolución 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019** **ARTICULO TERCERO: SANCIONAR** al señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.695.226, con la multa de TRES (03) S.M.L.M.V para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017 equivalente a DOSMILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS MCTE (\$2.213.151), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo." Y en el Resuelve de la **4152.010.21.0.0627 DEL DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021** **ARTICULO PRIMERO: NO REPONER** para confirmar la resolución No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019 por las razones expuestas.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. **Sustantivos:** - Artículo 237 y 241 de la Constitución Política de Colombia, por infracción directa de la Constitución y el Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
2. **Formales de la Demanda:** Arts. 162 al 167 de la Ley 1437 de 2011.
3. **Procesales Generales:** Arts. 164, 168 y siguientes, la Ley 1437 de 2011.
4. **Procesales Particulares:** Art. 137 de la Ley 1437 de 2011.

Por otro lado se puede observar y extraer de la pagina Ministerio de Transporte lo siguiente:



# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

### Supertransporte revisará más de 60.000 multas que habrían sido impuestas a vigilados de forma irregular por más de \$171.000 millones

Inicio • Supertransporte revisará más de 60.000 multas que habrían sido impuestas a vigilados de forma irregular por más de \$171.000 millones



- La decisión de la Superintendencia de Transporte se tomó tras elevar una consulta al Consejo de Estado sobre la normatividad aplicada por la Entidad desde 2016 en su régimen sancionatorio.
- El Consejo de Estado determinó que la aplicación de sanciones, al amparo de normas que fueron declaradas nulas: (i) tiene vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad; (ii) implica desconocimiento de la Ley y de una decisión judicial previa del Consejo de Estado; y (iii) abrió las puertas para “maniobras fraudulentas de la Administración en detrimento de los derechos de los ciudadanos”.
- La Superintendencia de Transporte examinará más de 60.000 expedientes en materia de transporte terrestre, que podrían ser archivados o revocados por ser violatorios del debido proceso. Igualmente, se levantarán los embargos de los casos afectados por esa situación de inconstitucionalidad.
- El Gobierno Nacional hace un llamado urgente a los vigilados para que NO acudan a tramitadores.

**Bogotá D.C., 5 de abril de 2019.** El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, conscientes de la necesidad de que el sector transporte se rija por el principio de legalidad, han trabajado conjuntamente en los últimos meses en revisar de manera exhaustiva las actuaciones sancionatorias adelantadas contra los vigilados.

En dicha revisión se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde 2016, seguían siendo utilizadas por la Entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte.

Por esta razón, el pasado 23 de octubre de 2018 la Entidad solicitó un concepto al Honorable Consejo de Estado (Sala de Consulta y Servicio Civil) respecto de la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas, particularmente las que corresponden al Decreto 3366 de 2003.

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

### No se necesitan tramitadores ni intermediarios

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte reiteran el llamado a los vigilados y a los ciudadanos para que no utilicen tramitadores en el proceso de solicitud de devolución de sus dineros, pues el Gobierno Nacional es el único garante en este procedimiento.

Lo anterior, en la medida que se realizará la revisión de cada uno de los 60.000 casos afectados, lo cual podrá tomar un tiempo razonable pero que, en todo caso, hará de oficio la misma Administración.

Para la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, esta decisión se tomó con el objetivo principal de proteger a los vigilados, ya que se debe garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos en el sector: “acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”, puntualizó la Ministra Orozco.

En marzo de 2019, el H. Consejo de Estado señaló que la nulidad declarada por el mismo Alto Tribunal (Sección Primera) en 2016, generó que las sanciones previstas en el Decreto 3366 de 2003 desaparecieran. Así mismo, resaltó en su concepto que la resolución 10800 de 2003, que codificaba las conductas del Decreto 3366 de 2003, había perdido su fuerza ejecutoria y por ello no podría ser aplicada contra los ciudadanos.

Por último, precisó el Consejo de Estado que, además de violar el principio de legalidad, (...) “pretender reconocer efectos a la Resolución 10800 para deducir de ella infracciones administrativas que materialmente son idénticas a las del decreto 3366, haría nugatoria la decisión judicial adoptada por la sección primera del Consejo de Estado y abriría las puertas a maniobras fraudulentas de la Administración, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.” (...)



# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

### Archivos y revocatorias

En ese sentido, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, conscientes de la necesidad de restablecer la legalidad que se perdió por muchos años en este sector, procederán a revisar aproximadamente 60.000 expedientes, que representan más de \$171.000 millones en multas a los ciudadanos.

En ese sentido, la Superintendencia de Transporte está conformando grupos especiales para realizar la revisión de esos expedientes afectados, incluyendo las investigaciones en curso, los casos que se encuentran en cobro coactivo y la atención de acciones judiciales iniciadas contra la Entidad.

De esta manera, serían objeto de revisión las multas impuestas a transportadores de carga y de pasajeros, incluidos los escolares, intermunicipales, y mixto de todo el país, por conductas como mantenimiento preventivo de los vehículos, capacitaciones a conductores y operadores, jornadas de trabajo de conductores y operadores, condiciones técnico mecánicas de los vehículos, exceder la capacidad transportadora autorizada, transportar carga con sobrepeso, entre otros.

Para la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas, es importante resaltar que esta decisión se tomó con el firme propósito de garantizar transparencia y legalidad en el sector transporte: "Queremos enviar un mensaje de calma a los vigilados que fueron afectados con la imposición de estas multas inconstitucionales; estamos demostrando que trabajamos con rigurosidad y siempre con miras al fortalecimiento del sector transporte, del emprendimiento y de la protección a los empresarios que cumplen la ley", enfatizó la Superintendente.

Nótese su señoría tan errada y temeraria motivación a la que está haciendo la administración municipal de Santiago de Cali, intentado hacer creer que la infracción cometida de mi poderdante se tipifica a este literal (que es un tipo en blanco) **cuando no es así**, y lo explico de la siguiente manera; el presente literal claramente ordena que **SOLO SE PUEDE APLICAR ESTE LITERAL CUANDO NO SE TIPIFIQUE EN ALGUNA OTRA CONDUCTA EN EL ORDENAMIENTO SANCIONATORIO**, pero si la había, dado que mi mandante presuntamente cometió una sanción **que sí estaba prevista y tipificada en un ordenamiento, como lo era el Decreto 3366 de 2003, en su "ARTÍCULO 24. Serán sancionadas las empresas de Transporte Público de pasajeros y Mixto por carretera con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:**

(...) c) Permitir la prestación del servicio en vehículos sin Tarjeta de Operación o con esta vencida (...).".

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

Es por ello, que se incurre en una falsa motivación del acto administrativo sancionatorio, dispuesto que la conducta a la cual se vio inmersa mi poderdante se tipificaba en el artículo 24 del Decreto 3366 de 2003; pero como la Administración Municipal de Santiago de Cali sabe que aquel fue declarado nulo por el **Consejo de Estado en Fallo con radicado 2008-00107 de la Sección primera del 19 de mayo de 2017 INTENTA TIPIFICAR LA CONDUCTA ENDILGADA DE MI PODERDANTE EN UNA NORMA CLARAMENTE QUE NO ES APLICABLE.**

Lo que descubre la total **FALSA MOTIVACIÓN** a la búsqueda de sancionar de cualquier manera ignorando lo dicho por el **HONORABLE CONSEJO DE ESTADO**, dado que esta corporación estableció que no puede existir sanción monetaria cuando ya se ha sancionado con la inmovilización del vehículo, y declaro la nulidad del Decreto 3366 del año 2003 en su artículo 24.

De otro lado, nótese la fundamentación del despacho en el **artículo 1 de la resolución 10.800 de 2003** que, como ya se presentó anteriormente el órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo el Honorable Consejo de Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil, consejero ponente Dr. Germán Alberto Bula Escobar el día cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019), con Radicación número: 11001-03-06-000-2018-00217-00(2403)<sup>2</sup>

**1. Falencia a tomar el literal e de la Ley 366 de 1996 que es un tipo en blanco o tipo abierto para sancionar. (error en tipificar sanción en norma en blanco)**

### <sup>2</sup> 2.2. Declaratoria de nulidad parcial del Decreto 3366 de 2003.

Decaimiento de la Resolución 10800 de 2003

El ejercicio comparativo realizado -al comienzo de este punto- entre el Decreto 3366 y los “códigos” de la Resolución 10800, indica que tales “códigos” se fundamentan en las “infracciones” de las normas declaradas nulas por la sentencia del 19 de mayo de 2016 de la Sección Primera del Consejo de Estado, lo que significa que no tienen fundamento jurídico alguno desde la ejecutoria de dicha sentencia, al desaparecer su fundamento de derecho. Este es un claro ejemplo de pérdida de ejecutoriedad que debe soportar la Resolución 10800 de 2003, según se ha explicado.

Por su parte, el informe de “infracciones de transporte” tampoco puede servir de “prueba” de tales “infracciones”, por la sencilla razón de que las conductas sobre las que dan cuenta no estaban tipificadas como infracciones por el ordenamiento jurídico. Es decir, los documentos conocidos como “informe de infracciones de transporte” no son representativos o declarativos de una “infracción de transporte”, en tanto se basen en las conductas “tipificadas” como tales en los artículos del Decreto 3366 de 2003 declarados nulos o en los “códigos” de la Resolución 10800 que a su vez se basan en ellos. Por estas razones no son el medio conducente para probar las “infracciones de transporte”.

Lo anterior trae las siguientes consecuencias:

i) Las actuaciones sancionatorias en curso, o que estén en discusión en sede administrativa se ven afectadas por la decisión judicial que anuló los artículos citados del Decreto 3366 de 2003, que sirven de base para los “códigos” relativos a las infracciones de transporte terrestre automotor, en la medida en que las “infracciones” allí señaladas desaparecieron del mundo jurídico y tales “códigos” registrados en la Resolución 10800 de 2003 perdieron su fuerza obligatoria, por lo que no existe una conducta típica que pueda ser reprochada como infracción de transporte con fundamento en tales normas.

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

Explico lo siguiente, el Consejo de Estado en la pregunta 1 de la consulta hecha por la ministra de Transporte contestó y que ya hice las especificaciones correspondiente e igualmente anexaré, confirmó lo siguiente y demarcó:

*“1. ¿La reserva de ley en materia sancionatoria para el sector de transporte terrestre, puede contener “tipos en blanco o abiertos”, los cuales necesariamente tendrían que completarse solo con normas de rango legal?”*

La jurisprudencia -constitucional y del Consejo de Estado-, ha permitido cierta flexibilización del principio de tipicidad, lo que se expresa en la exigencia mínima de describir los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, así como la determinación del tipo y cuantía de las sanciones que serán impuestas.

En la tipificación de las infracciones podrán preverse normas en “blanco” o incompletas, que no pueden ser entendidas como un “cheque en blanco” para ser llenado a voluntad por la Administración. Los tipos sancionatorios incompletos (en “blanco”) se aceptan bajo remisiones normativas precisas o criterios por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta.

Igualmente, pueden utilizarse conceptos jurídicos indeterminados, siempre y cuando sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole pertinente, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados.

La aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de *“predictibilidad de la sanción”*. La norma sancionatoria debe garantizar que se puedan predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción correspondientes.

No son admisibles formulaciones abiertas, que pongan la definición de la infracción o de la sanción prevista en la ley en manos de la de la autoridad administrativa.

En cuanto a la posibilidad del reenvío normativo a decretos reglamentarios, corresponde al legislador delimitar el contenido de la sanción a través de la configuración de los elementos estructurales del tipo, por lo que la remisión a la

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

norma reglamentaria debe permitir su cumplida ejecución. En tales casos, el contenido de la ley estará referido al núcleo esencial de la materia reservada, de manera que el reglamento se limite a desarrollar, complementar y precisar lo que ya ha sido de manera expresa contemplado en la ley. Es aquí donde el reglamento cumple una función de “*colaboración*” o complementariedad.

La Constitución no permite otorgar a la Administración la potestad genérica de establecer vía reglamento infracciones y sanciones administrativas, pues tiene reserva de ley ordinaria, y debe en todo caso respetar el debido proceso en punto a la legalidad y a la tipicidad, de conformidad con el inciso 2 del artículo 29 de la Carta Política.” (negrillas fuera de texto y subrayado).

Transcrito lo dicho por su órgano de cierre señor juez, téngase en esta segunda falencia y última que formularé, se presenta que la Administración, al declararle nula el Consejo de Estado el artículo 16 del Decreto 3366 de 2003, al cual se le podía tipificar la conducta a mi prohijada, uso como un cheque en blanco el literal e de la Ley 336 de 1996, notándose un gravísimo yerro en la motivación del acto administrativo, llevando las normas a su modo y sin respetar la jurisprudencia de la misma; no fue una falencia por falta de conocimiento de la autoridad sancionar con el literal e de la Ley 336 de 1996, sino que lo hizo para encuadrar algo que ya no existe en el mundo jurídico, tal como lo establece su Corporación de cierre.

De otro lado, me permito indicar al despacho que, su honorable juez ya resolvió una situación jurídica análoga y que fue citada por mi contraparte, en decisión de Sentencia No. 078 del siete (07) de siempre del 2020, en el proceso con radicado 76001-33-33-006-2019-0093-00, la cual fue apelada por la parte demandada, pero a su vez desistieron de dicho recurso, solicito sea tenidas en cuenta dicha motivación, en cuanto en el presente proceso también se discute la aplicación de la codificación del código 590 de la Resolución 10.800 de 2003 a sanción administrativa.

Los anteriores actos administrativos son totalmente ilegales, tal como lo dejó sentado nuestro **HONORABLE CONSEJO DE ESTADO EN RECIENTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CONCEPTO SOLICITADO POR LA MINISTRA DE TRANSPORTE, AL DECLARAR NULOS LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO 3366 DE 2003, Y QUE ESTABAN SUSPENDIDOS DESDE**



# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

MAYO DE 2008, CON LOS QUE VIENE SANCIONANDO LA SECRETARIA DE TRANSITO DE SANTIAGO DE CALI, PERO QUE AUN SIGUE SANCIONANDO COMO SI A LA SECRETARIA DE TRANSITO NO LE IMPORTARA SEMEJANTE PRONUNCIAMIENTO POR LA ÚLTIMA INSTANCIA JURISDICCIONAL COMO LO ES NUESTRO CONSEJO DE ESTADO.

Pues no se agotaron las etapas procesales como lo indica la Ley 1437 de 2011, como tampoco se dio aplicación al artículo 135 de la Ley 769 de 2002, pues nunca se notificó como lo dice su propio despacho y como se lee en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010 y que a la Letra se lee: **Procedimiento**. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al Infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo. Para el servicio además se enviará por correo dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Secretaria de Tránsito y Transporte para lo de su competencia. Para dar aplicación al artículo 132 del C. G. P, 136 de la Ley 769 de 2002, en concordancia con el artículo 9 del Decreto 3366 del 2003, dando aplicación al principio del *non reformatus in pellus*, en concordancia con la resolución 10.800 de 2003; también se configura una falsa motivación, establecida, entre el contenido y direccionamiento normativo que le da el Agente de Tránsito al Informe Único de Infracciones de Transporte (IUIT), PERO NO FUE ASÍ, PUES LO QUE ELABORÓ FUE UN INFORME A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO, VIOLANDO ASÍ EL ARTÍCULO 54 DEL DECRETO 3366 DE 2003; y no fue notificado para alegar de conclusión, por lo cual No se dio oportunidad para presentar alegatos de conclusión a la investigación, tal como lo ordena la Ley 1437 del año 2011 y por el contrario se procedió a sancionar de manera directa a mi representada, por ende incurre en la violación al Debido Proceso Administrativo, pues no permitió presentar Alegatos de Conclusión de acuerdo con el artículo 47 Capítulo III de la Ley 1437 del 2011.

(...)

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

**ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.** Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

*Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.*

*Los investigados podrán, dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente*

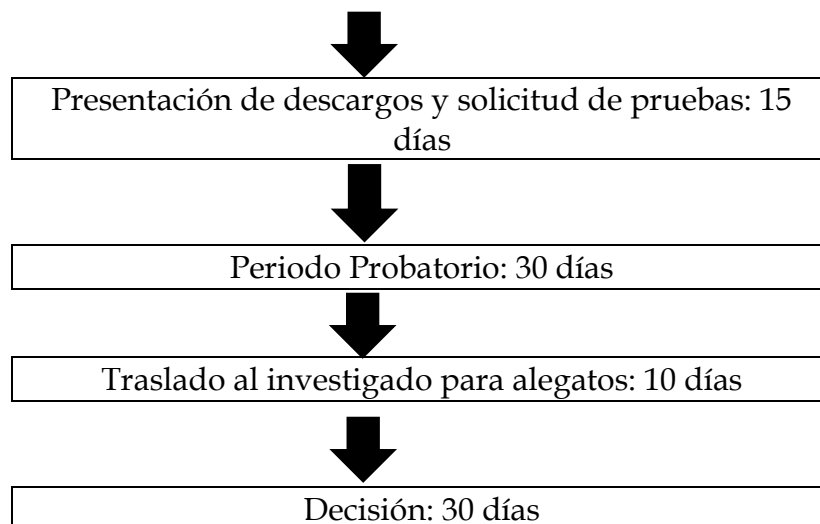
**PARÁGRAFO.** Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.



# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---



**Artículo 51, de la Ley 336 de 1996:** Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas, si fuere el caso, se adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se someterá a las reglas sobre vía gubernativa señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

### PRESUPUESTOS PROCESALES

- A. OPORTUNIDAD:** Por impetrarse en el presente caso una acción pública de nulidad, podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la publicación del acto impugnado.
- B. COMPETENCIA:** El Honorable **JUEZ ADMINISTRATIVO**, es competente para conocer esta acción de nulidad en razón a lo previsto por el artículo 149 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- C. PROCEDIMIENTO:** Es el indicado en los artículos 179 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- D. LA PARTE DEMANDANTE:** Es parte demandante en la presente acción el señor **GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA** actuando propietario del vehículo de placas VBV075, de condiciones civiles ya anotadas, quien concurre en su condición de ciudadano colombiano y en ejercicio de la potestad otorgada por el artículo 137 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- E. PARTE DEMANDADA:** Se demanda al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE**



# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

CALI - SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CALI  
representada legalmente por WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO, o  
por quien lo reemplace o haga sus veces.

### LO QUE SE DEMANDA

La NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de la siguiente  
resolución del Municipio de Santiago de Cali - secretaria de Tránsito de Santiago  
de Cali:

**PRIMERO-** Declarar la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de  
la Resolución No. 4152.010.21.0.0627 DEL DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021  
y No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019, proferida por el  
Municipio De Cali, Secretario de Tránsito y Transporte por, en cuanto la expresión  
allí contenida en el Resuelve de la **Resolución 4152.010.21.0.9201 del quince (15)  
de noviembre de 2019** "ARTICULO TERCERO: SANCIONAR al señor GONZALO  
ANTONIO CASTAÑO OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.695.226,  
con la multa de TRES (03) S.M.L.M.V para la época de la comisión de la infracción, es  
decir para el año 2017 equivalente a DOSMILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL  
CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS MCTE (\$2.213.151), por las razones expuestas en  
la parte motiva de este acto administrativo." Y en el Resuelve de la **4152.010.21.0.0627  
DEL DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021** ARTICULO PRIMERO: NO  
REPONER para confirmar la resolución No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de  
noviembre de 2019 por las razones expuestas.

### COMPETENCIA

La tiene Usted Juez Administrativo para conocer de este Medio de Control en  
razón a lo previsto por el artículo 155, en su numeral 3 de la Ley 1437 de 2011.

### CUANTIA

De conformidad con el numeral 1° del artículo 25 y 26 del Código General del  
Proceso, este proceso es de mínima cuantía, corresponde toda vez que las  
pretensiones no superan el equivalente a CUARENTA (40) SALARIOS  
MÍNIMOS LEGALES VIGENTES. También tiene la competencia usted señor Juez  
Administrativo en razón a la cuantía, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de  
2011, por ser el valor de la pretensión a la fecha de la presentación de esta solicitud  
es de DOSMILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

UNO PESOS MCTE (\$2.213.151) correspondiente de la siguiente manera.

- **SANCIÓN ADMINISTRATIVA:** DOSMILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS MCTE (\$2.213.151).
- **TOTAL, DE PERJUICIOS OCASIONADOS = DOSMILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS MCTE (\$2.213.151).**

### PRUEBAS

Solicito a esa Honorable Corporación decretar y tener como pruebas las siguientes:

- Resolución No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019.
- Resolución No. 4152.010.21.0.0627 DEL DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
- Poder amplio y suficiente.
- Conciliación ante la Procuraduría 59 Judicial.
- Constancia de no acuerdo

### ANEXOS

Se anexan las siguientes pruebas documentales para que sean tenidas en cuenta por su Honorable Corporación:

- Las enunciadas en el acápite de pruebas.

### NOTIFICACIONES

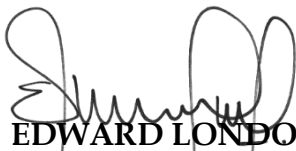
- La parte demandante en la Calle 30 N 2A - 29 Piso 2 oficina 302 y al Correo Electrónico: [valleint@gmail.com](mailto:valleint@gmail.com)
- La parte Demandada secretaria de Movilidad en la Carrera 3 No. 56 - 90, en el Barrio Salomía y al Correo Electrónico: [movilidad@cali.gov.co](mailto:movilidad@cali.gov.co)
- La parte Demandada Municipio de Santiago de Cali en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 - 70 y al Correo Electrónico: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co)
- El suscrito, recibirá en la Calle 10 No. 4 - 40 Oficina 505 Edificio Bolsa de Occidente, y a al correo electrónico [abogadodetransporte@gmail.com](mailto:abogadodetransporte@gmail.com)

# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

Del Honorable Juez, siempre respetuoso,



EDWARD LONDOÑO ROJAS.  
C.C. 16.774.413 de Cali - Valle.  
T. P. 116.356 C. S. J.



# EDWARD LONDOÑO ROJAS

## Abogado

---

Señores.

**JUEZ ADMINISTRATIVO**

Santiago de Cali - Valle.

**ASUNTO: PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE.**

Cordial saludo,

**GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA** persona mayor de edad é identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 9.695.226, actuando como propietario del vehículo de placas VBV 580, afiliado a la **Empresa TRANSPORTES MONTEBELLO S.A.**, identificada con Nit. No. 800.004.283-8, a usted manifiesto que confiero **PODER AMPLIO Y SUFICIENTE** al profesional del derecho **EDWARD LONDOÑO ROJAS**, persona también mayor de edad é identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 16.774.413 de Cali y Tarjeta Profesional N° 116.356 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y Representación de la Empresa, impetre Demanda Administrativa por el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante su respetado despacho en contra el **MUNICIPIO DE CALI, SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**, con domicilio en la Carrera 3 No. 56 - 90 en Cali - Valle, representada legalmente por **WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO**, o por quien lo reemplace o haga sus veces, frente a los fallos de la investigación Administrativa que culminaron con las Resoluciones Sancionatorias Números 4152.010.21.0.0627 del dieciocho (18) de mayo 2021 y 4152.010.21.0.9102 del quince (15) de noviembre del 2019

El apoderado especial queda revestido de todas las facultades del artículo 74 del Código General del Proceso en concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de igual manera para conciliar, firmar el acta de conciliación, presentar los recursos de Ley, sustituir, reasumir y demás a que haya lugar en el presente caso.

Sírvase con todo respeto reconocer personería adjetiva a mi apoderado especial,

Atentamente,

*Gonzalo A. Castaño*  
**GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA**  
C.C. N° 9.695.226.

Coadyuvo,

*Edward Londoño Rojas*  
**EDWARD LONDOÑO ROJAS**  
C. C. N° 16.774.413 de Cali - Valle  
T. P. N° 116.356 C. S. J.

---

Calle 10 No. 4 - 40 Ofi. 505. Edificio Bolsa de Occidente  
Teléfonos: 3975352 - 3187165235  
abogadodetransporte@hotmail.com  
Cali - Valle







**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**  
**Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



3879858

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Catorce (14) del Círculo de Cali, compareció: GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 9695226 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Gonzalo A. Castaño



drzpg825jz1w  
09/07/2021 - 15:59:10

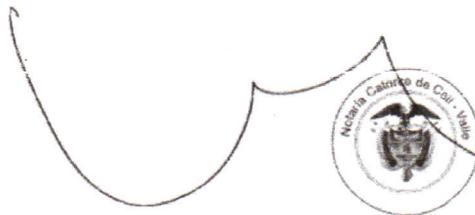


----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

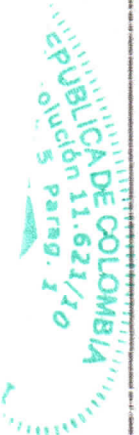
Este folio se vincula al documento de PODER signado por el compareciente, en el que aparecen como partes GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, sobre: PODER.



MARIA VICTORIA GUTIERREZ RUBIANO

Notario Catorce (14) del Círculo de Cali, Departamento de Valle - Encargado

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: drzpg825jz1w





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

Rad. 2020 417 30100 282112.

Recibido 16 marzo 2020

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 202041520100254571

Fecha: 2020-03-12

TRD: 4152.010.9.15.672.025457

Rad. Padre: 202041520100254571

OK.

Vence 31 marzo (2020)

Señor  
Gonzalo Antonio Castaño Ospina  
Carrera 31 No. 42A-39  
Cali

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO – Resolución No. 4152.010.21.0.9201 del 15 de noviembre de 2019.

Respetado Señor

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, y una vez surtido el trámite al que alude el artículo 68 de la norma antes mencionada, se procede a la siguiente notificación:

#### AVISO


RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0.9201 del 15 de noviembre de 2019, "POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960" expedida por el Secretario de Movilidad de Santiago de Cali.

Contra la Resolución No. 4152.010.21.0.9201 del 15 de noviembre de 2019, procede recurso de reposición ante el Secretario de Movilidad de Santiago de Cali, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación.

Se advierte que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del presente aviso en el lugar de destino.

Adjunto se remite copia íntegra del acto administrativo en mención.

Cordialmente.

  
ANDRÉS QUIMBAYO ROJAS  
Líder Grupo Transporte Público

Carrera 3 No. 56-90 – Santiago de Cali, Colombia  
Teléfono: (57)(2) 4184295  
[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)







ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 9201 DE 2019

( 15 NOV 2019 )

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN  
A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, el artículo 2.2.1.3.1.2. del Decreto 1079 de 2015, el artículo 200 numerales 3º y 16º del Decreto Municipal 411.0.20.0516 de 2016, el artículo 1º del Decreto Municipal 4112.010.20.0566 de 2017, el Decreto Municipal 4112.010.20.0187 de 2019; y

#### CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la ley 105 de 1993 establece que Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. Y que la seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y del sector transporte.

Que el artículo 4º de la ley 336 de 1996 establece que el transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, quien ejercerá la dirección, regulación y control, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.

Que el artículo 2.2.1.3.3. del Decreto 1079 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte" define que el transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo, en vehículos tipo taxi, es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino y el recorrido es acordado por las partes.

Que el artículo 2.2.1.3.1.2. idem señala que los alcaldes municipales o los organismos en quien estos deleguen tal atribución, tendrán a cargo la inspección, vigilancia y control de la prestación del mencionado servicio y no pueden autorizar servicios por fuera del territorio de su jurisdicción.

#### ANTECEDENTES:

1. El día 24 de marzo de 2017 el Agente de Tránsito identificado con la placa No. 209 elaboró el informe único de infracción de transporte No. 76001-0026960 al conductor del vehículo de servicio público microbús de placas VBV-075, señor HERNAN RAMIREZ ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.675.162, por prestar el servicio con la tarjeta de operación No. 257501 vencida, cuando transitaba por la Avenida 4N con Calle 44N de la ciudad de Cali.

2. El Agente de Tránsito consignó en el aludido informe No. 76001-0026960 que el vehículo era de propiedad del señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.695.226 y que estaba afiliado a la empresa de transporte público MONTEBELLO S.A. con NIT. 800.004.283.

3. En consideración de lo anterior, este Despacho realizó la correspondiente apertura de investigación administrativa mediante la Resolución No. 4152.010.21.0. 2537 del 6 de junio de 2018, a la empresa de transporte, al propietario y al conductor del vehículo.

4. Dentro de la presente actuación administrativa se cumplió con el debido proceso acorde a las normas legales y constitucionales, por lo cual se corrió traslado de la





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 9201 DE 2019

( 15 NOV 2019 )

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN  
A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

apertura a los investigados por el término de diez (10) días, para que presentaran escrito de descargos, solicitaran y/o aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer y las que consideraran pertinentes.

5. Para el efecto, respetando el principio de publicidad y el derecho de defensa, la citada resolución fue comunicada a la empresa de transporte mediante oficio No. 201841520100057334 del 25 de febrero de 2019, recibido el día 1 de marzo de 2019. Al propietario del vehículo por medio del oficio No. 201841520100057334 del 25 de febrero de 2019, recibido el día 4 de marzo de 2019 y al conductor a través del oficio No. 201841520100057334 del 25 de febrero de 2019, recibido el día 1 de marzo de 2019.

6. Dentro del término legal la empresa de transporte MONTEBELLO S.A. presentó escrito de descargos el día 12 de marzo de 2019 el cual quedó radicado con el Orfeo No. 201941520100067432 y aportó copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad expedido por la Cámara de Comercio de Cali, en el cual consta que el señor GERARDO BUENO ZUÑIGA, tiene la calidad de representante legal gerente suplente de la sociedad, quien le otorga poder al Doctor EDWARD LONDOÑO ROJAS.

El Doctor EDWARD LONDOÑO ROJAS, manifestó que a pesar del informe único de infracciones de transporte No. 76001-0026960 del 24 de marzo de 2017, obra es esta apertura de investigación como prueba y advierte que el vehículo de placas VBV-075 transitaba bajo código de infracción 590, no existe prueba técnica o evidencia alguna que soporte las afirmaciones del Agente de Tránsito de placas 209, toda vez que si bien es cierto el Informe Único de Infracciones al Transporte es el documento idóneo para iniciar una investigación administrativa en virtud a las características de idoneidad y veracidad que ostenta debido a su naturaleza de documento público, no es menos cierto que para entrar a formular cargos y generar un fallo sancionatorio, los fundamentos deben encontrarse soportados en un dictamen técnico adecuado que corrobore lo percibido por el funcionario y así determinar la responsabilidad de la empresa afiliadora del automotor presunto infractor, pues este tipo de conductas, logran una complejidad que supera las simples consideraciones emitidas a casusa de la percepción y solicita muy respetuosamente que se archive esta apertura de investigación de manera definitiva en contra de la empresa MONTEBELLO S.A.

Manifiesta que de igual forma la infracción, si es que la hubo, ya fue sancionada, pues obsérvese que la infracción 590, da como sanción la inmovilización, esto de acuerdo al Artículo 9 de la Ley 105 del 1.993 del Capítulo IV, Sanciones en su numeral 6 "Inmovilización o retención de vehículos"; misma que ya se cumplió como se muestra (foto a folio. 48).

Como medios de prueba solicitó que se aporte prueba documental por parte de la Secretaría de Movilidad de envió y recibido de la notificación si se hizo a la empresa de transportes MONTEBELLO S.A., se aporte y se aprecie con los principios rectores de la sana crítica, raciocinio, experiencia y lógica.

También se practique el testimonio del Agente de Tránsito identificado con la placa No. 209, con el objeto de que deponga sobre como elaboró el informe de infracciones y ratifique en que documento lo realizó y la fecha de su elaboración.







RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 9201 DE 2019

( 15 NOV 2019 )  
"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN  
A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

De igual manera manifestó que el vehículo al momento de ser abordado por el Agente de Tránsito no tenía planilla de despacho por parte de la empresa en ninguna de sus rutas autorizadas, e inclusive no se aportaron pruebas acerca de ello, pues fue el conductor que transitaba con él, pero no prestando un servicio público.

7. Dentro del término legal el conductor presentó escrito de descargos el día 13 de marzo de 2019 el cual quedó radicado con el Orfeo No. 201941730100321802.

Manifestó que a pesar del Informe único de infracciones de transporte No. 76001-0026960 del 24 de marzo de 2017, obra es esta apertura de investigación como prueba y advierte que el vehículo de placas VBV-075 transitaba bajo código de infracción 590, no existe prueba técnica o evidencia alguna que soporte las afirmaciones del Agente de Tránsito de placas 209, toda vez que si bien es cierto el Informe Único de Infracciones al Transporte es el documento idóneo para iniciar una investigación administrativa en virtud a las características de idoneidad y veracidad que ostenta debido a su naturaleza de documento público, no es menos cierto que para entrar a formular cargos y generar un fallo sancionatorio, los fundamentos deben encontrarse soportados en un dictamen técnico adecuado que corrobore lo percibido por el funcionario y así determinar la responsabilidad de la empresa afiliadora del automotor presunto infractor, pues este tipo de conductas, logran una complejidad que supera las simples consideraciones emitidas a casusa de la percepción.

8. Dentro del término legal el propietario presentó escrito de descargos el día 13 de marzo de 2019 el cual quedó radicado con el Orfeo No. 201941730100305532.

Manifestó que a pesar del informe único de infracciones de transporte No. 76001-0026960 del 24 de marzo de 2017, obra es esta apertura de investigación como prueba y advierte que el vehículo de placas VBV-075 transitaba bajo código de infracción 590, no existe prueba técnica o evidencia alguna que soporte las afirmaciones del Agente de Tránsito de placas 209, toda vez que si bien es cierto el Informe Único de Infracciones al Transporte es el documento idóneo para iniciar una investigación administrativa en virtud a las características de idoneidad y veracidad que ostenta debido a su naturaleza de documento público, no es menos cierto que para entrar a formular cargos y generar un fallo sancionatorio, los fundamentos deben encontrarse soportados en un dictamen técnico adecuado que corrobore lo percibido por el funcionario y así determinar la responsabilidad de la empresa afiliadora del automotor presunto infractor, pues este tipo de conductas, logran una complejidad que supera las simples consideraciones emitidas a casusa de la percepción y solicita muy respetuosamente que se archive esta apertura de investigación de manera definitiva.

Manifiesta que de igual forma la infracción, si es que la hubo, ya fue sancionada, pues obsérvese que la infracción 590, da como sanción la inmovilización, esto de acuerdo al Artículo 9 de la Ley 105 del 1.993 del Capítulo IV, Sanciones en su numeral 6 "Inmovilización o retención de vehículos"; misma que ya se cumplió como se muestra (foto a folio. 10).

También se practique el testimonio del Agente de Tránsito identificado con la placa No. 209, con el objeto de que deponga sobre como elaboró el informe de infracciones y ratifique en que documento lo realizó y la fecha de su elaboración.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RESOLUCIÓN No. 4152-010-210-9201 DE 2019

( 15 NOV 2019 )

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

#### PRUEBAS:

Señala el artículo 2.2.1.8.3.3. del Decreto 1079 de 2015 que los agentes de control consignarán las infracciones a las normas de transporte por escrito, y el informe se tendrá como prueba para el inicio de la investigación administrativa correspondiente.

En el presente caso, obra dentro del expediente el Informe Único de Infracciones de Transporte No. 76001-0026960 del 24 de marzo de 2017 realizado por el Agente de Tránsito identificado con la placa No. 209, en el cual se evidencia la trasgresión del artículo 49 literal e) de la ley 336 de 1996 por parte del conductor del vehículo de placas VBV-075, por prestar el servicio con la tarjeta de operación No. 257501 cuando se encontraba vencida.

#### ARGUMENTOS DEL DESPACHO:

El artículo 2.2.1.8.2. del Decreto 1079 de 2015 define la infracción de transporte terrestre automotor como aquella acción u omisión que vulnera la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor en los términos definidos en la ley o en los reglamentos de cada modalidad de servicio.

El artículo 2.2.1.8.3. ídem indica que las autoridades competentes para investigar e imponer sanciones por infracciones a las normas de transporte en la jurisdicción distrital y municipal son los alcaldes o los organismos de transporte o la dependencia en quienes se delegue esta función.

El artículo 2.2.1.3.8.1. s.s. ídem, señalan que la tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un automotor para prestar el servicio público bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con el radio de acción autorizado. Que es expedida únicamente a los vehículos legalmente vinculados a las empresas de transporte público debidamente habilitadas, por parte de la autoridad de transporte competente. Y el conductor debe portarla y presentarla cuando la autoridad se la solicite.

Del mismo modo Ley 336 de 1996, "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte", en su artículo 26 señala que todo equipo destinado al transporte público deberá contar con los documentos exigidos por las disposiciones correspondientes para prestar el servicio de que se trate. Y el artículo 49 literal c) señala que la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan la operación de un vehículo de servicio público conlleva la inmovilización del mismo, es decir, que tal conducta constituye una violación a las normas de transporte.

Si bien la inmovilización es una medida preventiva que busca evitar que se expongan intereses jurídicamente protegidos, salvaguardar el interés general, el principio de seguridad y protección a los usuarios regentes de las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, y está prevista como una sanción accesoria, vale la pena resaltar que se aplica principalmente para los casos de suma gravedad y alto grado de perturbación.

De acuerdo a lo expuesto, se entiende (i) que prestar el servicio de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo sin la tarjeta de







RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 9201 DE 2019

15 NOV 2019

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0028960"

Como en el presente caso permitió que el servicio se prestara sin que el conductor portara la tarjeta de operación, deberá asumir la responsabilidad de la infracción a las normas de transporte público terrestre automotor.

En cuanto a la empresa de transporte, en sus descargos expresó que a pesar del informe único de infracciones de transporte No. 76001-0026918 del 24 de marzo de 2017, obra es esta apertura de investigación como prueba y advierte que el vehículo de placas VCB-317 transitaba bajo código de infracción 590, no existe prueba técnica o evidencia alguna que soporte las afirmaciones del Agente de Tránsito de placas 585, toda vez que si bien es cierto el Informe Único de Infracciones al Transporte es el documento idóneo para iniciar una investigación administrativa en virtud a las características de idoneidad y veracidad que ostenta debido a su naturaleza de documento público, no es menos cierto que para entrar a formular cargos y generar un fallo sancionatorio, los fundamentos deben encontrarse soportados en un dictamen técnico adecuado que corrobore lo percibido por el funcionario y así determinar la responsabilidad de la empresa afiliadora del automotor presunto infractor, pues este tipo de conductas, logran una complejidad que supera las simples consideraciones emitidas a casusa de la percepción.

La empresa de transporte debió demostrar dentro de la presente investigación administrativa que realizó todas las gestiones o acciones pertinentes para que fuera expedida la tarjeta de operación (requerir al propietario para iniciar el trámite), que efectivamente hizo la entrega de la misma al propietario o conductor del aludido vehículo taxi, que alertó al propietario para que evitara la circulación del vehículo sin los documentos que soportaban la operación advirtiéndole de las consecuencias jurídicas que acarrearba su desatención, o en su defecto, que puso en evidencia de la Secretaría de Movilidad de Cali que dicho vehículo no había tramitado el aludido documento.

Con relación a la propietaria del vehículo de placas VBV-075 vale la pena decir que, en calidad de administrador del mismo y ostentar su tenencia, era la garante de todas las acciones que se realizaran con aquel. Por lo cual debió tomar las medidas necesarias para vigilar y evitar que se hubieran infringido las normas al transporte, máxime tratándose de la prestación de un servicio público esencial.

Además, tenía pleno conocimiento que en virtud de la Resolución No. 4152.0.21.2033 del 31 de julio de 2015, expedida por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali, la tarjeta de operación de su automotor había sido cancelada, por lo que para la fecha de los hechos el microbús no podía estar circulando por las calles prestando el servicio de transporte público porque no tenía el permiso correspondiente.

En consecuencia, deberá asumir la responsabilidad de la infracción a las normas de transporte público terrestre automotor.

En cuanto a la empresa de transporte, cabe resaltar que el Estado para garantizar y vigilar la debida prestación del servicio público de transporte que está a su cargo, debe apoyarse en los particulares, delegándoles tal función por medio de contratos de concesión celebrados con las empresas de transporte legalmente constituidas, otorgándoles una habilitación para el efecto.

Dicha legitimación debe ser entendida entonces, como el voto de confianza entregado a quien se considera idóneo para lograr el cumplimiento de los fines del estado. Razón por





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RESOLUCIÓN No. 4152-010-21-0- 9201  
( 15 NOV 2019 )

DE 2019

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN  
A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

operación o con la tarjeta de operación vencida constituye una falta a las normas de transporte, y (ii) que esta entidad es la autoridad competente para adelantar las actuaciones administrativas a que hubiere lugar en los eventos que las personas naturales o jurídicas infrinjan de manera directa o indirecta las normas regulatorias del transporte en su jurisdicción.

Una vez planteado el problema jurídico, procede el Despacho a estudiar las pruebas obrantes en el proceso.

El principio "onus probandi", se refiere a la actividad que corresponde a cada una de las partes en la tarea de hacer conocidos del juez los hechos en los que basa las afirmaciones de la demanda o de la defensa. Es por ello que en todo proceso probatorio media un acto intelectual, que va desde la aprehensión del hecho materia de debate hasta el convencimiento del funcionario mediante una operación de razonamiento, por lo que debe existir entonces una relación causal entre el hecho a probar y el resultado que desea obtener con el fin de proporcionar la convicción de la realidad.

En el caso en estudio, el conductor del vehículo de servicio público microbús de placas VBV-075 fue sorprendido por el Agente de Tránsito identificado con placa No. 209 el día 24 de marzo de 2017 prestando el servicio con la tarjeta de operación No. 257514 vencida cuando transitaba por la Avenida 4N con Calle 44N de la ciudad de Cali, razón por la cual le fue elaborado el IUIT No. 76001-0026960.

El señor HERNAN RAMIREZ ULLOA, manifestó en sus descargos que a pesar del informe único de infracciones de transporte No. 76001-0026960 del 24 de marzo de 2017, obra es esta apertura de investigación como prueba y advierte que el vehículo de placas VBV-075 transitaba bajo código de infracción 590, no existe prueba técnica o evidencia alguna que soporte las afirmaciones del Agente de Tránsito de placas 209, toda vez que si bien es cierto el Informe Único de Infracciones al Transporte es el documento idóneo para iniciar una investigación administrativa en virtud a las características de idoneidad y veracidad que ostenta debido a su naturaleza de documento público, no es menos cierto que para entrar a formular cargos y generar un fallo sancionatorio, los fundamentos deben encontrarse soportados en un dictamen técnico adecuado que corrobore lo percibido por el funcionario y así determinar la responsabilidad de la empresa afiliadora del automotor presunto infractor, pues este tipo de conductas, logran una complejidad que supera las simples consideraciones emitidas a casusa de la percepción.

No obstante de acuerdo con el artículo 2.2.1.3.8.7. del Decreto 1079 de 2015 infringió las normas de transporte al prestar el servicio sin uno de los documentos exigidos para el efecto, esto es, la tarjeta de operación vigente, por tanto deberá asumir la responsabilidad.

En cuanto al propietario del vehículo de placas VBV-075, vale la pena decir que en calidad de administrador del mismo, tenía la obligación de estar pendiente de que se contara con los documentos exigidos para la operación. Por tratarse de la prestación de un servicio público esencial, estaba a su cargo tomar las medidas necesarias para evitar transgresiones de cualquier naturaleza.







ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE TRÁFICO

RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 9201 DE 2019

( 15 NOV 2019 )

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN  
A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

la cual no pueden ser simples agentes tramitadores, sino verdaderos responsables de la actividad que se despliega dado el interés inmerso en ella.

Teniendo en cuenta que para la fecha de los hechos el mencionado microbús tenía la tarjeta de operación cancelada en virtud de lo dispuesto en la citada Resolución No. 4152.0.21.2033 del 31 de julio de 2015, y era de pleno conocimiento de la empresa tal situación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 C.P.G. ésta debió demostrar que efectivamente realizó todas las acciones pertinentes para (i) alertar a la propietaria y lograr que se abstuviera de autorizar la circulación del vehículo, (ii) exigirle a la propietaria que retirara del automotor los emblemas de la empresa, (iii) solicitar a la autoridad de transporte la desvinculación del vehículo de su parque automotor y la liquidación del contrato de vinculación celebrado con la propietaria.

Como ninguna de las conductas anteriores fue probada, deberá asumir la responsabilidad de la infracción a las normas de transporte público terrestre automotor.

Con relación a la prueba testimonial solicitada por parte de las partes investigadas en sus escritos de descargos, esta se negará porque no reúne las condiciones de procedencia, conducencia y utilidad para desvirtuar la ocurrencia de los hechos aquí debatidos.

Como no hay certeza de la entrega de la tarjeta de operación al propietario del vehículo, también debe asumir la responsabilidad de la infracción a las normas de transporte público terrestre automotor.

#### DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN:

Los artículos 44 (Conc. art. 9 ley 105 de 1993), y 46 de la Ley 336 de 1996 señalan que serán sujetos de sanción las personas que conduzcan vehículos, las personas propietarias de vehículos y las empresas de servicio público, entre otros, y la sanción en materia de transporte terrestre puede consistir en multa que oscilará entre uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El artículo 2.2.1.8.4. del Decreto 1079 de 2015 expresa que en la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de perturbación del servicio público de transporte y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la infracción.

Una vez demostrado que la conducta investigada constituyó una infracción a las normas de transporte directamente atribuible a las partes investigadas, por vulnerar los artículos 46 literal e) y 49 literal c) de la ley 336 de 1996, de acuerdo a los argumentos expuestos se procederá a:

- a) Imponerle al señor HERNAN RAMIREZ ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.675.162, conductor del vehículo de placas VBV-075, la multa de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos m/cte. (\$737.717,00), porque pese a tener conocimiento de la ausencia del documento que soportaba la operación decidió circular por la vía pública.
- b) Imponerle a la señora GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.695.226, propietario del vehículo de placas VBV-075, la





RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 9201

DE 2019

( 15 NOV 2019 )  
"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN  
A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (3 SMLMV) para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de dos millones doscientos trece mil ciento cincuenta y uno pesos m/cte. (\$2.213.151,00), a razón de ser el responsable de la administración de su vehículo.

- c) Imponerle a la empresa de transporte MONTEBELLO S.A. identificada con el NIT. 800.004.283 la multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de tres millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte. (\$3.688.585,00), porque su misión va más allá de la simple advertencia de las consecuencias del quebrantamiento del ordenamiento jurídico. La habilitación otorgada por la administración pública es el voto de confianza entregado a quien se considera idóneo para lograr el cumplimiento de los fines del estado, dentro de ellos la prestación del servicio de transporte.

Las empresas de transporte son verdaderas responsables de la actividad que se despliega, dado el carácter de servicio público esencial del servicio y el deber de protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señala la normatividad.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** DECLARAR RESPONSABLE al señor HERNAN RAMÍREZ ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.675.162, por infringir los artículos 44 (Conc. art. 9 ley 105 de 1993), y 46 de la Ley 336 de 1996 señalan que serán sujetos de sanción las personas que conduzcan vehículos, las personas propietarias de vehículos y las empresas de servicio público, entre otros, y la sanción en materia de transporte terrestre puede consistir en multa que oscilará entre uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** SANCIONAR, al señor HERNAN RAMÍREZ ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.675.162 conductor del vehículo de placas VBV-580, la multa de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos m/cte. (\$737.717,00), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO:** SANCIONAR, al señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.695.226, propietario del vehículo de placas VBV-075, la multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (3 SMLMV) para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de dos millones doscientos trece mil ciento cincuenta y uno pesos m/cte. (\$2.213.151,00), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO:** SANCIONAR a la empresa MONTEBELLO S.A. identificada con el NIT. 800.004.283 la multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de tres millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta







ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 9201 DE 2019

15 NOV 2019

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE – IUIT No. 76001-0026960"

y cinco pesos m/cte. (\$3.688.585,00), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución solo procede el recurso de reposición acorde al Decreto Municipal No. 4112.010.20.0566 del 25 de agosto de 2017, del cual podrá hacer uso por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los (10) diez días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según fuere el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Trascurridos treinta días de ejecutoriada la presente resolución sin que se haya verificado el pago de la sanción impuesta en la misma, remítase el presente expediente al área de Cobro Coactivo de esta Secretaría para que realice el correspondiente cobro acorde al artículo 52 de la ley 336 de 1996.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali

15 NOV 2019

  
WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Movilidad

Proyectó: Fener Arley Montaño Hincapié - Contratista  
Revisó: Flotán Carolina Aranda Cobo - Contratista  
Revisó: William Viquez Vianca - Coordinador Grupo Transporte Público  
Revisó: Oscar Alier Espinosa González - Jefe Oficina Contrataciones





ALCALDÍA DE  
**SANTIAGO DE CALI**  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Rad Padre: 201841520100057334  
Comunicación Externa  
Transporte público  
Oficio: 1675  
Fecha: 08/06/2021

*Rdo  
08/06/2021  
Correo electrónico  
Santiago*

EDWARD LONDOÑO ROJAS  
Apoderado del señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA  
Calle 10 No. 4 – 40 Oficina 505 / Edificio Bolsa de Occidente  
[abogadodetransporte@gmail.com](mailto:abogadodetransporte@gmail.com)  
Cali – Valle del Cauca

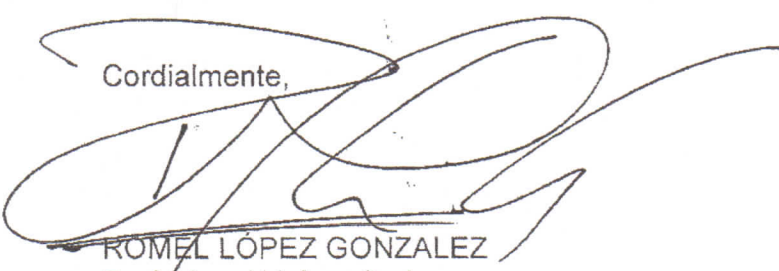
Asunto: Notificación Resolución No. 4152.010.21.0.0627 de mayo 18 de 2021

Cordial Saludo,

El artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de marzo 28 de 2020, establece que la notificación o comunicación de actos administrativos, hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hará por medios electrónicos; en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el citado Decreto Legislativo, adjuntamos copia de la resolución No. 4152.010.21.0.0627 de mayo 18 de 2021 "POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" y se le informa que contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Anexo: Copia integra de la resolución No. 4152.0.21.0.0627 de mayo 18 de 2021

Cordialmente,

  
ROMEL LÓPEZ GONZALEZ  
Profesional Universitario  
Grupo de Transporte Público  
Secretaría Distrital de Movilidad de Cali

Elaboró: José Carlos Ortégón Santander – Contratista *C.O.*





RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0.0627 DE 2021

( 18 MAY 2021 )

"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"

EL SECRETARIO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 2.2.1.8.1 y el artículo 2.2.1.8.3 del Decreto N° 1079 de 2015, el artículo 200 numeral 3 del Decreto Extraordinario Municipal N° 411.0.20.0516 de 2016, el artículo 9 del Decreto Municipal N° 411.0.20.673 de 2016, el artículo 1 literal G y el artículo 2 del Decreto Municipal de delegación N° 411.0.20.0566 de 2017, Decreto Distrital 4112.010.20.0007 de 2020; y

CONSIDERANDO:

Que el día 24 de marzo de 2017 fue elaborado informe único de transporte N° 76001-0026960 toda vez que fue sorprendido el vehículo de placas VBV075 prestando un servicio público de transporte colectivo de pasajeros con la tarjeta de operación cancelada.

Que surtidas las etapas procesales conforme al trámite contemplado en los artículos 50 y 51 de la ley 336 de 1996 referente a la investigación administrativa en materia de transporte, este Despacho mediante la Resolución N° 4152.010.21.0.9201 del 15 noviembre de 2019 "Por la cual se resuelve una investigación administrativa por infracción a las normas de Transporte - IUIT N° 76001-0026960", resolvió lo siguiente: "...ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor HERNAN RAMÍREZ ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.675.162, por infringir los artículos 44 (Conc. Art. 9 ley 105 de 1993), y 46 de la Ley 336 de 1996 señalan que serán sujetos de sanción las personas que conduzcan vehículos, las personas propietarias de vehículos y las empresas de servicio público, entre otros, y la sanción en materia de transporte terrestre puede consistir en multa que oscilará entre uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes. ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR al señor HERNAN RAMÍREZ ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.675.162, conductor del vehículo de placas VBV-580 la multa de un salario mínimo legal mensual vigente (1SMLMV) para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos m/cte. (\$737.717.00), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. ARTÍCULO TERCERO: SANCIONAR al señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.695.226, propietario del vehículo de placas VBV-075, la multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (3 SMLMV) para la época de la comisión de la infracción; es decir para el año 2017, equivalente a la suma de dos millones doscientos trece mil ciento cincuenta y un pesos m/cte. (\$2.213.151.00), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. ARTÍCULO CUARTO: SANCIONAR a la empresa MONTEBELLO S.A. identificada con NIT. 800.004.283, con la multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) que para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017, equivalente a la suma de tres millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte. (\$3.688.585.00), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo."

Que encontrándose dentro del término legal los señores HERNAN RAMÍREZ ULLOA mediante radicado 202041730100282132, GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA mediante radicado N° 202041730100282112 y la empresa de transporte TRANSPORTES MONTEBELLO S.A mediante radicado N° 202041730100282052 todos del 04 de marzo de 2020, presentaron por intermedio de apoderado Dr. Edward Lodoño Rojas recursos de reposición y en subsidio apelación respectivamente en contra la Resolución N° 4152.010.21.0.9201 del 15 noviembre de 2019 "Por la cual se resuelve una investigación administrativa por infracción a las normas de Transporte - IUIT N° 76001-0026960".



RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0.0627 DE 2021

( 18 MAY 2021 )

"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"

#### ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES.

Indica el apoderado de los recurrentes:

1. Que se encuentra en desacuerdo con la gradualidad de la sanción impuesta.
2. Que no se notificó a los recurrentes del informe de infracciones tal como lo ordena la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383 de 2.010, o sea tres (3) días después de la presunta comisión de la infracción.
3. Que no se les permitió presentar alegatos de conclusión en la presente investigación, como lo ordena la ley 1437 de 2011, configurándose una violación al debido proceso.
4. Que se está sancionando con base en una conducta atípica, pues se quiere sancionar basado en artículos que se encuentran declarados nulo del decreto N° 3366 de 2003 por medio del fallo 107 de 2008 del Consejo de Estado.
5. Que se presentó trasgresión al debido proceso administrativo con el que se llevó el presente procedimiento, toda vez que no se agotaron las etapas procesales como lo indica la Ley 1437 de 2011.
6. Que la presunta sanción impuesta fue cumplida al haber sido inmovilizado el vehículo de transporte público, teniendo en cuenta que se debe aplicar el artículo que concuerda con este como es el 5 del Decreto 3366 de 2003, vigente para la fecha de los hechos y actualmente, y que se vulneraron los principios de no reformatio inpeius y non bis in idem.
7. Que se ha violado el debido proceso, toda vez que no se agotaron las etapas procesales como lo indica la Ley 1437 de 2.011, en concordancia como la aplicación del artículo 135 de la Ley 769 de 2.002, pues nunca se notificó del "comparendo" como lo dice el artículo 135 de la Ley 769 de 2.002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2.010.
8. Que la prueba aportada fue un informe a las infracciones de tránsito é incurriéndose con ello en una nulidad insaneable.
9. Que presenta los recursos de reposición y en subsidio de apelación, que el despacho los desconoce, puesto que el recurso de apelación si procede. En este sentido, con lo anteriormente expuesto el apoderado solicita ordenar de acuerdo al acervo probatorio allegado al proceso el cese del procedimiento administrativo en contra de sus representados y en su lugar reponga para revocar la Resolución N° 4152.010.21.0.9201 del 15 noviembre de 2019 "Por la cual se resuelve una investigación administrativa por infracción a las normas de Transporte – IUIT N° 76001-0026960".

#### APRECIACIONES DEL DESPACHO

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia.

Que Mediante la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de



RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 0627 DE 2021

( 18 MAY 2021 )

**"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"**

2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19, en todo el territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que el artículo 6 del Decreto de Estado de Emergencia N° 491 de 2020, indicó que:

"Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia."

Que en virtud de lo anterior, el Distrito de Santiago de Cali profirió el Decreto N° 4112.010.20.0725 del 17 de marzo de 2020, mediante la cual resolvió suspender los términos de los procesos y actuaciones administrativas que se surten ante las diferentes dependencias Distritales, a partir del 17 hasta el 31 de marzo de 2020, luego, dicho Decreto fue adicionado mediante el Decreto N° 4112.010.20.0754 del 30 de marzo de 2020 indicando dicha suspensión hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante el Decreto N° 4112.010.20.1443 del 19 de agosto de 2020, se decide el levantamiento de la suspensión de términos de los procesos y actuaciones administrativas que se surten ante las diferentes dependencias Distritales, a partir del 18 de agosto de 2020.

Que mediante la Resolución N° 0000222 del 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, decidió prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021 en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución N° 385 de 2020, y prorrogada a su vez, por las Resoluciones N° 844, 1462 y 2230 de 2020.

Que el Decreto 1079 de 2015 en su Artículo 2.2.1.8.3. Indica que las Autoridades competentes para investigar las infracciones a las normas del transporte, e igualmente imponer sanciones son las siguientes: "...En la jurisdicción distrital y municipal: los alcaldes o los organismos de transporte o la dependencia en quienes se delegue esta función".

Ahora bien, para resolver los puntos de inconformidad expuestos por los recurrentes, al ser similares los motivos de inconformidad, este Despacho resolverá cada argumento ya que los recursos presentados por el apoderado cuentan con similitud de argumentos.

Inicialmente hay que precisar que el transporte es considerado como un servicio público esencial y se encuentra regulado por las Leyes 105 de 1993; 336 de 1996 y el Decreto Único Compilatorio 1079 de 2015, los cuales regulan el funcionamiento de las empresas que prestan el servicio, los modos de prestar el servicio, define las competencias de las autoridades de transporte, así como el régimen de infracciones y procedimiento para





RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 0627 DE 2021

( 18 MAY 2021 )

**"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"**

imponer sanciones, valor de las mismas, los sujetos de sanción por vulneración a las normas de transporte.

Como primer punto frente a la dosificación de la sanción, se debe indicar que los artículos 44 (conc. art. 9 ley 105 de 1993) y 46 de la Ley 336 de 1996 señalan que serán sujetos de sanción las personas que conduzcan vehículos, las personas propietarias de vehículos y las empresas de servicio público, entre otros, y la sanción en materia de transporte terrestre puede consistir en multa que oscilará entre uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes: "...Con base en la graduación que se establece en el presente Artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción (...) PARÁGRAFO. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte: a. Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes; (...)"

De la misma forma el artículo 2.2.1.8.4. del Decreto 1079 de 2015 expresa que en la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de perturbación del servicio público de transporte y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la infracción.

Es de anotar frente a los sancionados (Empresa de Transporte) al haber permitido la prestación el servicio público de transporte en un vehículo que ya no se encontraba afiliado a la misma y que no contaba con la autorización (Tarjeta de operación vigente) por parte del Estado, así como el propietario y el conductor del vehículo, pusieron en riesgo a la comunidad y a los usuarios del mismo, vulnerando principios consagrados en la ley, tales como el de seguridad de los usuarios de las vías consagrado en la Ley 105 de 1993 artículos 2. Lit. e. y 3, puesto que, si eventualmente se presentara un siniestro con dicho vehículo durante la prestación del servicio de transporte, al no contar con la autorización vigente (tarjeta de operación) bien podría la empresa aseguradora que expide las pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual, objetar las reclamaciones, por lo cual, los usuarios quedan en total desprotección, constituyendo de conformidad al artículo 2.2.1.8.4. del Decreto compilatorio N° 1079 de 2015, en un riesgo para las personas, indica el mencionado artículo: "Graduación de la sanción. En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de perturbación del servicio público de transporte y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la infracción. Para este efecto, se tendrá en consideración los daños ocasionados a la infraestructura de transporte, el riesgo a la integridad y vida de las personas, a los bienes que se transportan y los perjuicios causados a los mismos".

De igual forma, la Corte Constitucional frente al transporte público de personas ha indicado que: "El transporte en calles y carreteras mediante los diferentes vehículos que permiten el tránsito terrestre son una de las formas conducentes para asegurar el goce efectivo de la libertad de locomoción. Pero se trata de formas de transporte que también generan riesgos para la vida y la integridad de las personas, que demandan un control del Estado. El poder de regulación del transporte no sólo busca asegurar que en efecto las personas puedan desplazarse, busca también que éste se dé en condiciones de seguridad, sin tener que exponer la vida y la integridad personal a riesgos más allá de lo razonable. Es decir, usar vehículos terrestres para el desplazamiento humano, supone generar o asumir riesgos significativos, incluso de muerte. El Estado, al asegurar las condiciones de seguridad y remover los obstáculos que impidan minimizar la probabilidad de que dichos riesgos tengan lugar, protege los derechos cardinales a la vida y a la integridad personal, presupuestos de toda libertad." Corte Constitucional Sentencia C-885 de 2010.



RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 0627 DE 2021

( 18 MAY 2021 )

"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"

A este respecto, no basta con que exista un servicio de transporte, sino que sea un transporte seguro en cumplimiento de los controles impuestos por el legislador para el efecto. Lo anterior, considerando que la conducción de vehículos automotores es legalmente calificada como una "actividad peligrosa".

Para resolver lo concerniente al procedimiento sancionatorio en materia de transporte, consagrado en la Ley 336 de 1996 "Estatuto General de Transporte" en ninguno de sus artículos dispone que se deba realizar el traslado del informe único de infracciones IUIT dentro de los (3) tres días siguientes a la elaboración del mismo como lo dice el recurrente, toda vez que la disposición enunciada por el defensor es la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones" la cual se aplica para las contravenciones en materia de tránsito la cual regula la circulación de las personas, peatones, usuarios, conductores y la vulneración a dichas normas de comportamiento genera por parte de la autoridad de tránsito un comparendo, situación totalmente distinta a la regulación en transporte, la que aquí nos ocupa, puesto que ésta cuenta con una normatividad especial – transcrita arriba - y regula todo lo concerniente en la materia, la Superintendencia de Transporte, en la circular externa N° 015 del 20 de noviembre de 2020 manifestó que: "El Ministerio de Transporte como ente rector en temas de tránsito y transporte, ha dejado claro que el régimen de tránsito terrestre es diferente del régimen de transporte, pues (i) las disposiciones de transporte terrestre regulan la prestación del servicio público de transporte terrestre y particularmente se encuentran en la ley 336 de 1996; mientras que (ii) las disposiciones de tránsito terrestre regulan el comportamiento de "usuarios" de la vía (peatones, conductores de vehículos tanto de servicio particular como de servicio público, pasajeros y propietarios de vehículos) para transitar en las vías del territorio nacional y se encuentran principalmente en la ley 769 de 2002, la ley 1383 de 2010 y la resolución 3027 de 2010. Son reglas de circulación de obligatorio cumplimiento."

Así mismo, cabe anotar que cuando se le corrió el traslado de la apertura de investigación administrativa a la sancionada con esta también se le dio traslado del informe único de infracciones N° 76001-0026960 como se demuestra dentro del expediente administrativo que contiene los oficios N° 201941520100260671 del 25 de febrero de 2019 con fecha de recibido del 01 de marzo de 2019, dirigidos a la empresa de transporte, al propietario del vehículo de las placas anotadas por medio del oficio N° 201941520100260701 del 25 de febrero de 2019 recibido el 04 de marzo de 2019 y al conductor por medio del oficio N° 201941520100260691 del 25 de febrero de 2019 recibido el 01 de marzo de 2019.

Así mismo hay que anotar que sí se encuentra establecido en la ley un procedimiento especial el cual se debe aplicar para esta clase de procesos sancionatorios – transporte – dispuesto en el artículo 50 de la Ley 336 de 1996 Estatuto General de Transporte, el cual determina lo siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual deberá contener: a.) Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos. b.) Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la investigación. c.) Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, al presunto infractor para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica.", a su vez el artículo 51 indica que: "...Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas, si fuere el caso, se adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se someterá a las reglas sobre vía gubernativa señaladas en el Código Contencioso Administrativo".





RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0.0627 DE 2021

( 18 MAR 2021 )

**"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"**

Al igual de lo que sucede con los procedimientos administrativos especiales frente al procedimiento administrativo ordinario, en este evento prevalecen las normas especiales frente a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como por ejemplo lo dispuesto en el Código Disciplinario Único o en las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos; es así que el procedimiento dentro de la actuación administrativa que cuestiona el recurrente se realizó conforme a lo dispuesto en el estatuto general de transporte, para despejar las dudas frente a su aplicación en la materia, el Ministerio de Transporte, máxima autoridad rectora, al resolver una consulta ciudadana frente a la aplicación de la ley 336 de 1996 o la ley 1437 de 2011, mediante oficio N° 20161340104451 del 3 de febrero de 2016 indicó claramente que al adelantar por parte de las autoridades de transporte el procedimiento sancionatorio en materia de transporte se debía aplicar el capítulo noveno de la ley 336 de 1996, y es de anotar que dentro del procedimiento especial sancionatorio en materia de transporte no se contempla los alegatos de conclusión como una etapa procesal, por ello, es preciso anotar que no se le vulneró el debido proceso como lo indica el recurrente.

Frente a la atipicidad de la conducta alegada por el apoderado, tenemos que la conducta en la cual incurrió la sancionada sí se encuentra descrita como una de las infracciones a las normas del transporte, puesto que la ley 336 de 1996 en su artículo 49 indica que: "...ARTÍCULO 49. La inmovilización o retención de los equipos procederá en los siguientes eventos: c) Cuando se compruebe la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan la operación del equipo y sólo por el tiempo requerido para clarificar los hechos. (...) e) Cuando se compruebe que el equipo no reúne las condiciones técnico - mecánicas requeridas para su operación, o se compruebe que presta un servicio no autorizado. En este último caso, el vehículo será inmovilizado por un término hasta de tres meses y, si existiere reincidencia...", siendo que el vehículo de servicio público de las placas anotadas fue sorprendido prestando un servicio sin la autorización - tarjeta de operación cancelada - documento que soporta la operación de los equipos acorde a lo estipulado en el artículo 2.2.1.8.3.1. del Decreto 1079 de 2015 que expresa: "Documentos que soportan la operación de los equipos. De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los documentos que sustentan la operación de los equipos son: (...) 2. Transporte público colectivo de pasajeros metropolitano, distrital o municipal: Tarjeta de Operación", la cual se define según el artículo 2.2.1.1.11.1. idem como: "La tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios autorizados". lo anterior en concordancia con el artículo 16 de la Ley 336 de 1996 que expresa: " De conformidad con lo establecido por el Artículo 3° numeral 7° de la Ley 105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto en Tratados, Acuerdos o Convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según que se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación, servicios especiales de transporte, tales como: escolar, de asalariados, de turismo y ocasional.". lo anterior, igualmente concordado con el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 que indica: Con base en la graduación que se establece en el presente Artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos: (...) e) En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan violación a las normas del transporte."

A ese respecto, en reiterada jurisprudencia se ha indicado que quienes realicen operaciones de transporte público en condiciones de informalidad o ilegalidad, deben ser controlados y sancionados por las autoridades competentes. Al punto que la misma Superintendencia de Transporte ha manifestado por intermedio de sus circulares dirigidas a los distintos organismos y autoridades de Transporte lo siguiente: "...Por lo



RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 0617 DE 2021

( 18 MAY 2021 )

**"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"**

tanto, cada autoridad encargada de aplicar las leyes de tránsito y de transporte, deberá verificar si la conducta que se somete a su consideración infringe una o ambas leyes y, por tanto, si debe existir la aplicación de las consecuencias previstas en cada una de ellas. Lo anterior aplica para el control fuera de vía, como para el control en vía mediante los documentos contemplados para el efecto (comparendo o Informe Único de Infracciones al Transporte, según corresponda). Considerando el grave problema que supone para los habitantes del país quedar a merced del transporte ilegal, la Superintendencia hace un llamado a las Autoridades de Tránsito, Organismos de Tránsito, Entidades del Sistema Nacional de Transporte para que dentro de su jurisdicción apliquen las normas del régimen de tránsito terrestre, así como también las de transporte terrestre de pasajeros, especialmente en lo relacionado con la prestación de transporte ilegal, y se impongan las sanciones previstas por el legislador en las distintas normas, cuando haya mérito para ello." (Circular Externa N° 015 del 20 de noviembre de 2020).

Hay que precisar que la inmovilización de vehículos de transporte público cuando es sorprendido cometiendo una presunta infracción a las normas del transporte, no se realiza a título de sanción como lo menciona el apoderado en su escrito, puesto que la finalidad de esta medida es suspender temporalmente la circulación del equipo automotor para que subsane la causa que la motivó, esto se efectúa para proteger la seguridad a los usuarios principio rector que rige el transporte en Colombia, dicha medida se encuentra soportada jurídicamente en el decreto N° 3366 de 2003 en su artículo 47 define y establece claramente el procedimiento que se debe llevar a cabo para la inmovilización de los vehículos de transporte público, el cual indica que: "...Inmovilización. Consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. La inmovilización se impondrá como medida preventiva sin perjuicio de las sanciones que por la comisión de la falta se imponga a la empresa de transporte o al propietario del equipo. La orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de transporte competente, previa comprobación directa de haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización."

De lo antes transcrito, puede concluirse que no se vulneró a la empresa de transporte principios constitucionales como non bis idem y reformatio in pejus, lo que sí llama la atención es que el apoderado trata de desligar el vehículo de transporte público de la empresa que defiende, así mismo, al inmovilizar el vehículo de servicio público no se estaría sancionando a la empresa de transporte.

Ahora bien, referente a la nulidad insaneable del informe de infracciones N° 76001-0026960 del 24 de marzo de 2017, por cuanto en el título del mismo no indica la palabra transporte, no es de recibo si observamos bien el informe único de infracciones arriba mencionado indica en su título de tránsito, situación que para nada genera alguna irregularidad, puesto que el mismo contiene los elementos o datos necesarios para determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos materia de investigación.

Por último, frente a la improcedencia del recurso de apelación en esta clase de procesos sancionatorios, este Despacho no lo desconoce como lo pretende hacer ver el apoderado en su escrito, se debe precisar que dicha facultad es delegada por la máxima autoridad Distrital que es el Alcalde, así entonces, el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte N° 1079 de 2015 determina lo siguiente: "Artículo 2.2.1.1.2.1. Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte competentes las siguientes: En la Jurisdicción Distrital y Municipal: los Alcaldes Municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución.", así mismo, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional" estipula lo siguiente: "Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.". es así que en cumplimiento





RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0. 0627 DE 2021

( )

18 MAY 2021

"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"

del Decreto Municipal de delegación N° 411.0.20.0566 de 2017, "Por el cual se delegan unas funciones al Secretario de Movilidad de Santiago de Cali" en su artículo primero expresó que: "... Artículo Primero. DELEGUESE en el Secretario de Movilidad las facultades otorgadas a las Autoridades de Transporte conforme las normas de orden nacional, departamental o municipal que regulan la materia, entre las cuales las siguientes funciones especiales: (...) g. Sancionar conforme a la Ley, a quienes infrinjan lo establecido en el Estatuto Nacional de Transporte y todas las normas especiales que regulen la prestación del servicio de transporte público." y en su artículo segundo se indicó que: "Contra las resoluciones que expida el Secretario de Movilidad en ejercicio de las funciones especiales que le han sido delegadas en el artículo anterior, procede el recurso de reposición." motivo por el cual, no es procedente el recurso de apelación que invoca el apoderado.

Teniendo en cuenta las disposiciones antes citadas, el mérito probatorio de los documentos que obran dentro del proceso sea lo primero decir, se no logra desvirtuar el informe Único de Infracción de Transporte, así como tampoco, se observa que haya presentado pruebas que él considerara conducentes para esclarecer los hechos, puesto que mediante la resolución No. 4152.0.21.2033 del 31 de julio de 2015 la cual fue comunicada mediante el oficio No. 2015415200202221 del 3 de agosto de 2015 y en la cual se resolvió cancelar las tarjetas de operación de 65 vehículos dentro de los cuales se encontraba el vehículo de placas VBV075, lo que significaba que aquellos vehículos de servicio público no podían continuar prestando el servicio público de transporte y que es responsabilidad de la empresa de transporte a la cual se encontraban afiliados tomar las medidas necesarias para evitar esto, así como del propietario y del conductor del vehículo de transporte público.

Así pues, analizando se concluye que no se vulneró o desconoció el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política del recurrente, toda vez que la Secretaría de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali, le garantizó e hizo efectivo el debido proceso en todos sus aspectos, destacándose que se hizo uso de la oportunidad y la forma debida; y garantías procesales observadas a plenitud en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

Artículo Primero: NO REPONER y en consecuencia confirmar la resolución No. 4152.010.21.0.9201 del 15 noviembre de 2019 "Por la cual se resuelve una investigación administrativa por infracción a las normas de Transporte - IUIT N° 76001-0026960", por las razones expuestas en este acto administrativo.

Artículo Segundo: NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del C.P.A.C.A y/o acorde al artículo 4° del Decreto Legislativo N° 491 de 2020 de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.



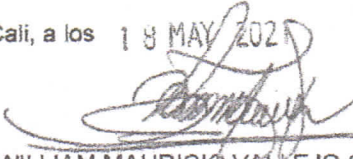
RESOLUCIÓN No. 4152.010.21.0.0627 DE 2021  
( 18 MAY 2021 )

"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"

Artículo Tercero: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, por encontrarse en firme, en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


Dado en Santiago de Cali, a los 18 MAY 2021

  
WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Movilidad

Proyectó: Álvaro Hernán Losada Ángel - Contratista  
Revisó: Romel López González - Profesional Universitario S.M.  
Andrés Quimbayo Rojas - Jefe de Oficina de Contravenciones (E) - Secretaría de Movilidad





	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO AUTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-012	Página	Página 1 de 1

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 59 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación No. 3787 de 27 de julio de 2021.	
Convocante (s):	GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA
Convocado (s):	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
Medio de control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**AUTO N. °128-1- 2021**

Santiago de Cali, 14 de septiembre de 2021.

La Procuraduría 59 Judicial I para Asuntos Administrativos, considerando que,

Que mediante auto número 128-2021 de 30 de julio de 2021, se fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación no presencial en el asunto de la referencia, el día **16 de septiembre de 2021 a las 2:35 P.M.**

Que el día 13 de septiembre de 2021, la doctora DIANA JOHANA OSPINA PINEDA, apoderada de la entidad convocada, solicitó el aplazamiento de la audiencia de conciliación, atendiendo que para la fecha prevista aún no cuenta con la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito Especial de Santiago de Cali, por haber asumido recientemente la representación de la entidad.

Que por ser procedente, es menester reprogramar la audiencia atendiendo la solicitud elevada por la apoderada de la entidad convocada.

Por lo anterior

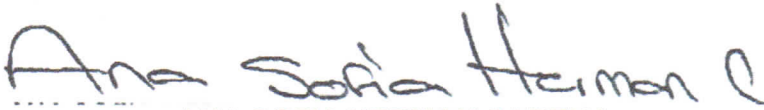
**RESUELVE**

**PRIMERO:** Señalar como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación no presencial, el día **7 de octubre de 2021 a las 3:35 P.M.**

**SEGUNDO:** Reconocer personería al (la) doctor(a) **DIANA JOHANA OSPINA PINEDA** para actuar en calidad de apoderada de la entidad convocada **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.**

**TERCERO:** Notificar la presente decisión a las partes convocante y convocada

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**




**ANA SOFIA HERMAN CADENA**  
**Procuradora 59 Judicial I para Asuntos Administrativos<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020: "Artículo 11: De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio".

Lugar de Archivo: Procuraduría 59 Judicial I Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
--	--------------------------------	---------------------------------------



 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-006	Página	Página 1 de 2

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 59 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación No. 3787 de 27 de julio de 2021.	
Convocante (s):	GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA
Convocado (s):	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
Medio de control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO


En los términos del artículo 2.º de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.º del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015<sup>1</sup>, el artículo 9 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, la Resolución 312 de 29 de julio de 2020 y la Resolución No. 462 de 30 de noviembre de 2020, el (la) Procurador (a) 59 Judicial I para Asuntos Administrativos expide la siguiente:

**CONSTANCIA:**

1. El señor **GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA**, presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día **27 de julio de 2021**, convocando al **DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**.
2. Las pretensiones de la solicitud fueron las siguientes: *"Declarar la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de la Resolución No. 4152.010.21.0.0627 del dieciocho (18) de mayo de 2021, recibida el ocho (08) de junio del 2021 y No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019, proferida por el Municipio De Cali, Secretario de Tránsito y Transporte por, en cuanto la expresión allí contenida en el Resuelve de la Resolución 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019 "ARTICULO TERCERO : SANCIONAR al señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, igual persona mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 9.695.226 propietario del vehículo de placas VBV 075, la multa de TRES (3) S.M.L.M.V para la época de la comisión de la infracción, es decir para el año 2017 equivalente a DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$2.213.151), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo." Y en el Resuelve de la Resolución 4152.010.21.0.0627 del dieciocho (18) de mayo de 2021 ARTICULO PRIMERO: NO REPONER para confirmar la resolución No. 4152.010.21.0.9201 del quince (15) de noviembre de 2019 por las razones expuestas". Estimó la cuantía en \$3.447.270.*
3. La audiencia se hizo de manera no presencial, a través de la aplicación TEAMS, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Resolución N° 312 de 29 de julio de 2020 *"Por la cual se regula la celebración de audiencias de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones"*, en la que se dispone que los Procuradores Judiciales podrán realizar las audiencias de que trata el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del Decreto 1069 de 2015 en la modalidad no presencial, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dispuestas o autorizadas por la Procuraduría General de la Nación, con las que se garanticen su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta; además la Resolución No. 462 de 30 de noviembre de 2020, proferidas por el Procurador General de la Nación. así como el artículo 9 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020.
4. Llegado el día previsto para la audiencia de conciliación, **7 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 3:25 P.M.**, la misma se declaró **FALLIDA**, por no existir ánimo conciliatorio de la entidad **CONVOCADA DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**.
5. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del CPACA.

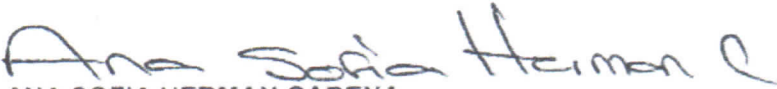
<sup>1</sup> Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho". Antiguo artículo 9º del Decreto 1716 de 2009.

Lugar de Archivo: Procuraduría 59 Judicial I Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
--	--------------------------------	---------------------------------------

 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-006	Página	Página 2 de 2

6. En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, no hay lugar a devolución de documentos a la parte convocante, por haber sido radicada la solicitud de conciliación en sede virtual.

Dada en Santiago de Cali, el día 7 DE OCTUBRE DE 2021.

  
ANA SOFIA HERMAN CADENA  
Procuradora 59 Judicial I para Asuntos Administrativos

2

Santiago de Cali, \_\_\_\_\_

En la fecha recibí la presente constancia y los documentos aportados a la conciliación.

Nombre: \_\_\_\_\_

Cedula: \_\_\_\_\_


Firma: \_\_\_\_\_

T.P: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020: "Artículo 11: De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio".



9102-0629

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-003	Página	1 de 2

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 59 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación No. 3787 de 27 de julio de 2021.	
Convocante (s):	GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA
Convocado (s):	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
Medio de control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**AUTO N. °128-2021**

Santiago de Cali, 30 de julio de 2021.

La Procuraduría 59 Judicial I para Asuntos Administrativos, una vez revisados los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 161<sup>1</sup> del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo – CPACA, en concordancia con lo dispuesto el artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015<sup>2</sup>; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, respecto de la ampliación del término previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001.

Que la Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución 312 de 29 de julio de 2020 “Por la cual se regula la celebración de audiencias de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, en la que se dispone que los Procuradores Judiciales podrán realizar las audiencias de que trata el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del Decreto 1069 de 2015 en la modalidad no presencial, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dispuestas o autorizadas por la Procuraduría General de la Nación, con las que se garanticen su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Admitir la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el señor **GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA**, el día **27 de julio de 2021**.

**SEGUNDO:** Realizar la audiencia de conciliación de manera no presencial y señalar como fecha y hora para su celebración el día **16 de septiembre de 2021 a las 2:35 P.M.**

**TERCERO:** La audiencia antes indicada se realizará de manera no presencial de conformidad a las siguientes reglas:

**1.-** A más tardar el día 14 de septiembre de 2021 los apoderados de las partes deberán suministrar al correo electrónico [asherman@procuraduria.gov.co](mailto:asherman@procuraduria.gov.co), la siguiente información y documentos:

**1.1.- Los apoderados de la parte convocante:**

**1.1.1.-** Correo electrónico en el cual recibirán la invitación para asistir a la audiencia.

**1.1.2.-** Número de celular

**1.1.3.-** Sustitución de poder si para la diligencia sustituye poder.

**1.1.4.-** Si la parte convocante es una entidad se deberá allegar la respectiva certificación o acta del Comité de Conciliación en la que se exponga la decisión del Comité de Conciliación, aquellas entidades que no tengan Comité por no estar obligadas a ello, la certificación del representante legal, respecto a la posición de la entidad o persona natural si es del caso

**1.2.- Los apoderados de las partes convocadas:**


<sup>1</sup>CPACA, Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

<sup>2</sup> Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. Antigua artículo 6° del Decreto 1716 de 2009.

Lugar de Archivo: Procuraduría 59 Judicial I Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
--	--------------------------------	---------------------------------------



	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-003	Página	2 de 2

- 1.2.1- Allegar certificación o acta del Comité de Conciliación en la que se exponga la decisión del Comité de Conciliación, aquellas entidades que no tengan Comité por no estar obligadas a ello, la certificación del representante legal, respecto a la posición de la entidad o persona natural si es del caso.
- 1.2.2- El poder y demás documentos de prueba de la calidad de quien otorga el poder.
- 1.2.3.- Correo electrónico en el cual recibirán la invitación para asistir a la audiencia.
- 1.2.4.- Número de celular.

1.3.- Los documentos deben ser legibles, en formato PDF de baja resolución o comprimirse si son muy pesados.

2.- La audiencia se desarrollará así:

2.1.- La audiencia iniciará a la hora señalada en el numeral segundo del presente auto y a ella se accede a través del link, que será proporcionado al correo electrónico que se suministre para tal fin por los apoderados de las partes. Tendrá una duración máxima de 30 minutos

2.2.- En el evento en que una de las partes no se conecte a la audiencia mientras dure la misma, se considerará como inasistencia para todos los efectos legales.

2.3.- La agente del Ministerio Público levantará un acta del desarrollo de la audiencia, en la cual se describirá el procedimiento llevado a cabo y las manifestaciones de las partes. El acta será suscrita por la agente del Ministerio Público y a ella se adjuntará copia de la grabación de la audiencia. Copia del acta será remitida por medios electrónicos a las partes. Si hubiere acuerdo total o parcial, la agente del Ministerio Público dejará constancia de tal circunstancia en el acta, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015.

2.4.- La constancia de que trata el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 640 de 2001, será remitida al apoderado convocante por medios electrónicos.

2.5.- En caso de requerir más información puede comunicarse en horario laboral al teléfono 3187956128.

**CUARTO:** Reconocer personería al (la) doctor(a) **EDWARD LONDOÑO ROJAS** para actuar en calidad de apoderado del convocante.

**QUINTO:** Comunicar de la presente decisión a la(s) parte(s) convocante(s) y convocada(s); lo anterior a través del correo electrónico suministrado por la parte convocante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**ANA SOFIA HERMAN CADENA**  
 Procuradora 59 Judicial I para Asuntos Administrativos<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020: "Artículo 11: De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio".

Lugar de Archivo: Procuraduría 59 Judicial I Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
--	--------------------------------	---------------------------------------